



NUE 226-A-2019 (YC)

Fiallos Valdez contra Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Resolución definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las ocho horas con cincuenta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veinte.

1. Descripción del caso:

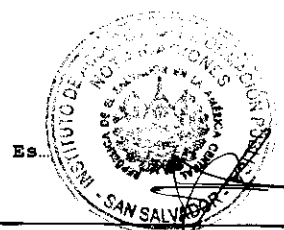
A. Oscar Miguel Fiallos Valdez, en adelante el apelante, apeló ante este Instituto de la resolución de referencia MARN-OIR N°168-2019, emitida el 3 de septiembre de 2019 por la oficial de información de la **Ministerio de Agricultura y Ganadería (en adelante MAG)**, que denegó información consistente en:

“Copia del estudio de factibilidad de la Central de Abastos”.

En ese orden, la oficial de información del **MAG** resolvió no entregar la información solicitada por estar clasificada como reservada desde el 17 de septiembre de 2018, bajo la declaratoria de reserva con referencia OPPS/01/2018, estando publicado en el índice de información reservada en el portal de transparencia de la institución. No obstante, señaló haber recomendado a la Oficina de Políticas y Planificación Sectorial – OPPS – de ese Ministerio que se desclasificara la información, porque luego de revisar algunas líneas resolutivas emitidas por este Instituto, especialmente la NUE 108-A-2018 de CEPA, NUE 28-A-2013 de ANDA, y la NUE ACUM 80 y 57-A-2016 (CO), el IAIP ha ordenado la entrega de la información al ciudadano en solicitudes similares.

Por su parte, el recurrente manifestó su inconformidad, expresando que a su criterio, la información solicitada no es ni proyecto de defensa, inteligencia del Estado, seguridad pública, ni compromete estrategias del Estado en cuestiones judiciales y no constituye

Página 1 de 14



ninguna ventaja indebida a personas en perjuicio de un tercero. En ese sentido, solicitó que se ordene la entrega del estudio requerido.

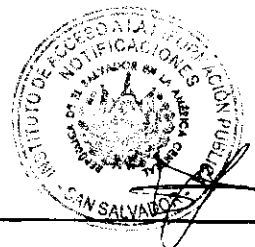
B. El Instituto admitió la apelación y designó a la Comisionada Olga Noemy Chacón de Hernández para instruir el procedimiento. Sin embargo, al haber finalizado su período de suplencia, se reasignó el caso a la Comisionada en funciones **Yanira del Carmen Cortez Estévez**, a efecto de dar continuidad al presente procedimiento.

El informe justificativo al que se refiere el Art. 88 de la LAIP, fue suscrito por Alba Andrea Castro y Daniela Patricia García de Cubas, en su calidad de apoderadas del señor Ministro de Agricultura y Ganadería, adjuntando la documentación de acreditación correspondiente. En dicho informe manifestaron en lo medular: *i)* que el estudio solicitado se encuentra entre las excepciones que citan los Arts. 19 y 24 de la LAIP; es decir, que es información reservada. Dicha declaratoria de reserva aplica para todo el estudio y tiene un plazo de reserva de tres años contados a partir de su declaratoria (17-9-2018), motivándose la misma bajo las causales previstas en el Art. 19 letras “g” y “h” de la Ley de Acceso a la Información Pública; *ii)* que la finalidad de dicho estudio es la conceptualización de un polígono de distribución de alimentos al por mayor, con la finalidad de que se convierta en el centro de alimentos de referencia del país, en el que operarían comerciantes de todo tipo de alimentos, así como agentes económicos que participan en el rubro de alimentos como operadores de servicios de cadenas de frío, logística, almacenamiento, transformación y distribución; *iii)* que en vista que la conceptualización de dicho polígono está compuesta de elementos que van desde la constitución hasta la entrada de operaciones del mismo, con actividades, responsabilidades y actividades de supervisión de parte de las autoridades competentes, hacerlo del conocimiento del público antes de su finalización – los cuales constituirán los términos de referencia para todas las adquisiciones que ese Ministerio debe realizar para la operatividad y funcionamiento de la misma – comprometería grandemente las políticas estratégicas que ese Ministerio está impulsando para desarrollar y promover políticas de comercialización de los insumos que se relacionen con la producción agropecuaria nacional; *iv)* que de existir filtraciones de los documentos que están confeccionando, significaría una ventaja contra otros ofertantes que puedan existir, porque

permitiría hacer estudios de mercado que posibiliten disminuir costos de adquisición, siendo esto lo que se busca proteger con la declaratoria de reserva del estudio de factibilidad del proyecto *“Construcción y equipamiento de una Central de Abastos para mejorar e incrementar la competitividad de los productores y comercializadores agropecuarios en la zona central del El Salvador”*. Finalmente, solicitaron que se sobresea definitivamente a su representado en este proceso por no haberse incumplido ninguna norma.

C. La audiencia oral se llevó a cabo de manera virtual a las diez horas del treinta de junio de este año, por medio de la plataforma “Meet” de Google, con la comparecencia únicamente de las apoderadas especiales del ente obligado, licenciadas **Alba Andrea Castro y Daniela Patricia García de Cubas**, quienes manifestaron no contar con incidentes que plantear para la no realización de la audiencia ni elementos probatorios que ofrecer para ser incorporados al expediente.

En la fase de alegatos, la representación del **MAG** expuso en lo medular: a) que el estudio de factibilidad solicitado por el apelante fue denegado en virtud de encontrarse reservado por una vigencia de tres años, plazo que aún está vigente; b) que tal como lo establece el art. 19 de la LAIP letras “g” y “h”, como Ministerio consideran que ese estudio de factibilidad se compone desde la entrada en operaciones del mismo, actividades y responsabilidades de supervisión de las autoridades competentes, por lo que hacerlo de conocimiento público antes de su finalización contribuiría o constituirá – en los términos de referencia de ese Ministerio – una ventaja sobre todas las adquisiciones que el **MAG** pueda realizar para la operatividad y el funcionamiento de la misma, pudiéndose comprometer las políticas y estrategias que están impulsando para desarrollar y promover las políticas de comercialización de los insumos que se relacionan con la producción agropecuaria nacional; c) que dicho proyecto tiene la finalidad de asegurar el abastecimiento adecuado y oportuno, la calidad, la composición y las cualidades de los mismos (*Sic.*); en ese sentido, consideran que no es viable entregar esta información, aparte que dicho estudio de factibilidad es un proyecto en desarrollo, por lo que si se dan los términos de referencia para el funcionamiento del mismo, se estaría revelando información que va a generar ventaja en beneficio de la persona que lo está solicitando, pues tendrá conocimiento de su contenido antes de su puesta



en marcha, teniendo a su vez ventaja sobre las demás personas que oportunamente puedan participar en las licitaciones o contrataciones que ese Ministerio pueda realizar para la construcción y equipamiento de la central de abastos; d) que por todo ello, solicitan concretamente que se mantenga la reserva de dicha información y se sobresea a su representado, pues estiman que no se ha incumplido la LAIP ya que la declaratoria se hizo con antelación a la solicitud de información del ciudadano.

Finalizados los alegatos, el Pleno manifestó que no tenía preguntas que realizar a la representación del ente obligado. Finalmente, el Pleno se pronunció con relación a un escrito que ingresó al expediente en fecha 27 de noviembre de 2019 (fs. 22), que en virtud que el mismo no va dirigido al Pleno de este Instituto, no se tiene certeza de la finalidad con la que fue presentado, pues la persona que lo suscribe no es parte en el presente procedimiento y tampoco fue acreditada para tales efectos por ninguna de las partes, por lo que se declaró sin lugar el mismo, aclarándose que no se tomará en cuenta para ningún elemento de valoración en este procedimiento.

D. Posteriormente, mediante el auto de las nueve horas con veinticinco minutos del trece de noviembre de dos mil diecinueve, se dejó sin efecto la audiencia oral realizada el 30 de junio de este año, en razón que habiéndose elaborado el proyecto de resolución definitiva, resultaba imposible pronunciar la misma por los siguientes motivos:

i) El Pleno que conoció en audiencia oral estaba conformado por las comisionadas Claudia Liduvina Escobar Campos, Silvia Cristina Pérez Sánchez, Cesia Yosabeth Mena Reina, Yanira del Carmen Cortez y el comisionado Andrés Grégori Rodríguez.

ii) En esa línea, la Comisionada Cesia Yosabeth Mena Reina actualmente está inhabilitada de concurrir con su voto, por encontrarse en trámite un procedimiento administrativo sancionatorio iniciado en su contra por la Presidencia de la República, con medida cautelar de suspensión del ejercicio de su cargo.

iii) Desde el nombramiento del comisionado titular por el sector de universidades, Ricardo José Gómez Guerrero, en el mes de agosto de este año, se gestionó con la Licenciada Silvia Cristina Pérez Sánchez, la modalidad de revisión de tal proyecto de resolución, lo cual

quedó plasmado en el punto de Pleno siete, del acta número veintinueve de fecha diecisiete de agosto del corriente año, donde ella expuso que debido a que al momento en que dejó de estar en funciones como comisionada, el proyecto de resolución no estaba finalizado, por lo que solicitó una convocatoria adicional para finalizar el procedimiento, por lo que se consultó a la Corte de Cuentas de la República, sobre su viabilidad de realizar una convocatoria para tales efectos por no tener normado ese tipo de convocatorias; sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta de parte de dicha Institución, ni tampoco la anuencia de dicha comisionada de concluir el acto que conoció.

Por lo anterior, no fue posible configurar el pleno que se instaló para conocer este procedimiento, pues una de sus integrantes ya no ostenta dicha investidura y la otra se encuentra inhabilitada de dicho cargo, por lo tanto, se estimó pertinente buscar una alternativa para garantizar de mejor manera los derechos de ambas partes, considerando que la audiencia oral es el último momento que tienen para el ofrecimiento de prueba correspondiente. En tal sentido, en el mismo auto se resolvió señalar las quince horas del veinte de noviembre para la repetición de la audiencia oral correspondiente al presente procedimiento.

Llegado el día y hora del nuevo señalamiento, la misma se realizó por medio de la plataforma "ZOOM" (de acuerdo a lo expuesto en el Acta que se levantó en dicha sesión, folio 46 del presente expediente), únicamente con la comparecencia de la apoderada del ente obligado, licenciada Daniela Patricia García de Cubas, quien manifestó no contar con incidentes que interponer para la realización de la misma ni prueba que ofertar para ser incorporada al expediente.

Posteriormente, se llevó a cabo la fase de alegatos, en la cual la licenciada García de Cubas ratificó la resolución emitida por la oficial de información y los argumentos vertidos en el informe de Ley. Por parte del Pleno, no se realizó ninguna pregunta de índole aclaratorio.

2. Análisis del caso:

Para el análisis que nos concierne, este Instituto ha determinado su pronunciamiento respecto a: *si la copia del estudio de factibilidad de la Central de Abastos, cuyo nombre*



técnico es “Estudio de factibilidad del proyecto ‘Construcción y equipamiento de una Central de Abastos para mejorar e incrementar la competitividad de los productores y comercializadores agropecuarios en la Zona Central del El Salvador”, es información que debe mantenerse en reserva. En este contexto, el examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: (I) Breve referencia al Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP) y sus límites, y (II) Análisis del caso en concreto, en torno al cumplimiento de requisitos de la declaratoria de reserva.

I. En ese orden, es preciso recordar que el DAIP tiene una condición indiscutible de derecho fundamental, reconocida tanto nacional como internacionalmente en vasta jurisprudencia. Por lo tanto, corresponde a este Instituto, como garante de ese derecho, realizar la labor de armonización y determinación de su alcance, así como la ponderación cuando este entre colisión con otros derechos fundamentales con cuya esfera de aplicación interactúa, especialmente cuando deba pronunciarse sobre la validez de restricciones a dicho derecho.

Asimismo, es importante mencionar que, la Sala de lo Contencioso Administrativo reconoció que como regla general toda la información que resguarden los entes obligados en el desempeño de sus funciones institucionales, debe ponerse a disposición del público y la negativa injustificada de su entrega, podría constituir una afectación al DAIP, y un incumplimiento legal¹.

Ahora bien, el DAIP no es una prerrogativa absoluta, su interacción con otros derechos de igual rango posibilita escenarios de restricciones justificadas. En este sentido la LAIP regula las limitantes para acceder a la información pública, que en términos generales se clasifican en: **la información reservada –Art. 19-; información confidencial (en todas sus dimensiones) –Art. 24-; y la información inexistente –Art. 73-.**

Por otro lado, toda restricción al DAIP debe analizarse tomando en cuenta el principio de máxima publicidad consagrado en el Art. 4 de la LAIP, es decir, que toda la información

¹ Sentencia definitiva de fecha 28 de enero de 2019 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, referencia 408-2016.

en poder de las entidades obligadas es pública, salvo que cuente con algunas de las excepciones contempladas en la misma Ley. La jurisprudencia del sistema interamericano de protección de derechos humanos ha establecido que los Estados tienen la carga de la prueba en demostrar que las limitaciones al acceso a la información son compatibles con las normas interamericanas sobre libertad de expresión²; también lo ha afirmado el Comité Jurídico Interamericano en su resolución sobre los “Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”, al establecer que “la carga de la prueba para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe recaer en el órgano al cual la información fue solicitada”³. Lo anterior, a efecto de generar seguridad jurídica en el ejercicio del derecho de acceso a la información, pues al estar la información en control del Estado, debe evitarse al máximo la actuación discrecional y arbitraria del mismo, en el establecimiento de restricciones al derecho⁴.

En este orden de ideas, corresponde al ente obligado demostrar de manera fehaciente la aplicación de cualquiera de las causas de restricción al derecho de acceso a la información, incluidos aquellos para considerar que una información es reservada, como en el caso que nos ocupa.

II. En esa línea, el ente obligado denegó la información solicitada alegando que la misma se encuentra reservada con base en el Art. 19 literales g) y h) de la LAIP, según la resolución de declaratoria de reserva OPPS/01/2018 de fecha 17 de septiembre de 2018.

En ese sentido, el principio de publicidad establece que el acceso a la información pública es la regla general, mientras que la reserva de la misma es la excepción en casos puntuales; tiene su límite cuando existe una disposición legal anterior de interpretación restrictiva y que, conforme a la Constitución, esté justificada en razones que respondan a un interés superior o a un posible perjuicio directo o inminente para el Estado, persona o personas determinadas. Sin embargo, la misma puede contener información que puede ser

² Corte IDH. *Caso Claude Reyes y otros*. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 93.

³ Comité Jurídico Interamericano. Resolución 147 del 73° Período Ordinario de Sesiones: Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información. 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 7.

⁴ Corte IDH. *Caso Claude Reyes y otros*. *Op.cit.*



catalogada como reservada, ello debe entenderse en el sentido que no pueden haber negativas o restricciones genéricas, sino solo referidas a casos concretos y a necesidades puntuales. Dicho de otro modo, la negativa genérica, injustificada o cualquier restricción arbitraria al derecho de acceso a la información significará un incumplimiento o un abuso de los deberes de su cargo por parte del funcionario que así se pronuncie o actúe (Cfr. PIERINI, Alicia y LORENCES, Valentín, Derecho de acceso a la información, Universidad, Buenos Aires, 1999, pág. 159).

El titular del ente obligado es el encargado de clasificar la información, debiendo justificar en legal forma el por qué se decide excluir temporalmente una información del conocimiento público, pues una vez concluido el plazo de reserva, la información vuelve a ser pública y por tanto puede ser solicitada por cualquier persona en virtud del DAIP. Es importante señalar que **las causales establecidas en el Art. 19 de la LAIP son taxativas** y no pueden invocarse otras que no estén señaladas en la ley.

El MAG fundamenta la reserva de la información requerida por el apelante, en la causal del art. 19 letra “g” de la LAIP, la cual expresa: *“La que comprometiére las estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales o administrativos en curso”*. Esta causal se refiere a los procedimientos en curso tramitados por los entes obligados; por lo que, la reserva de la información fundamentada en esta causal solo dura hasta que se adopte la decisión final.

Asimismo, invoca la causal contenida en la letra “h” de la precitada disposición legal, la cual establece: *“la que pueda generar una ventaja indebida a una persona en perjuicio de un tercero”*, haciendo referencia a aquella información que genere una ventaja incorrecta e ilegal a favor de una persona, afectando así a otra(s).

Ahora bien, este Instituto ha sostenido reiteradamente que para la validez de una declaración de reserva se necesita la concurrencia de tres caracteres o requisitos: (a) legalidad, (b) razonabilidad y (c) temporalidad, y que ante la ausencia de uno de ellos debe desclasificarse la información.

En ese sentido, para determinar la validez de la reserva alegada por el ente, este Instituto analizará el cumplimiento de tales requisitos en observancia del acto administrativo de reserva: “OPPS/01/2018 de fecha 17 de septiembre de 2018”, el cual consta a folios 18, 17 y 16 del expediente administrativo relacionado con el presente caso, el cual fue remitido a este Instituto el 30 de noviembre de 2019, según lo dispuesto en el Art. 82 inc. 2° de la LAIP, de acuerdo al razonamiento siguiente:

(a) Legalidad. La facultad que tienen las autoridades para reservar cierta información debe enmarcarse en el ordenamiento legal vigente, a fin de garantizar que los límites al ejercicio del DAIP estén dirigidos a la protección de otros derechos de idéntica o superior importancia.

Al respecto, la oficial de información argumentó en su resolución que la reserva encuentra su fundamento en el Art. 19 letras “g” y “h” de la LAIP, argumento que fue ratificado por la representación del ente obligado tanto en el informe de ley como durante la audiencia oral del caso.

Aunado a lo anterior, para cumplir con este requisito no basta la mera invocación de las causales en que se fundamenta la declaratoria de reserva, sino que también es indispensable que dicho acto administrativo conste por escrito; es decir, que se emita la respectiva declaratoria o resolución de reserva por el servidor público competente para ello. Los artículos 21 de la LAIP, 17, 27, 28 y 31 de su Reglamento (RELAIP) establecen que la declaratoria debe ser emitida ya sea por el titular del ente obligado o aquel a quien se delegue.

En el caso en comento, dicho acto administrativo de reserva se encuentra plasmado en la declaratoria “OPPS/01/2018 de fecha 17 de septiembre de 2018”, y donde se puede constatar que el ente fundamenta la reserva con base al ya mencionado art. 19 letras “g” y “h” de la LAIP. Asimismo, se puede verificar que la declaratoria fue emitida por Jorge Alberto Salinas, en su calidad de Director de la Oficina de Políticas y Planificación Sectorial (OPPS), quien según lo señalado en dicho documento, fue designado y facultado para tales efectos según el “Acuerdo de Delegación 148 BIS” del 21 de marzo de 2012. En conclusión, se advierte que hasta este momento dicha declaratoria cumple con el requisito de legalidad.



(b) Razonabilidad. Es necesario que se razone y fundamente la adopción de esta limitación, pues con ello se busca reducir la arbitrariedad en las actuaciones de los funcionarios con potestad para declarar la clasificación de la información pública en reservada. En esencia, no basta con enunciar las causales legales y los motivos que conllevan al ente obligado a declarar la reserva, sino que tales argumentos deben ser jurídicamente válidos, en la medida que no se establezca un límite arbitrario al DAIP. Dicho de otra manera, es necesario acreditar que se cumple con las condiciones necesarias para su aplicación; es decir, que las circunstancias que motivan la reserva de la información que se trate se ajustan a lo previsto por la ley.

Bajo esa lógica, tenemos que las razones que motivan la reserva del estudio de factibilidad solicitado, según la declaratoria “OPPS/01/2018”, son las siguientes:

“El estudio de factibilidad del proyecto ‘Construcción y equipamiento de una Central de Abastos para mejorar e incrementar la competitividad de los productores y comercializadores agropecuarios en la zona central del El Salvador’, se considera como información reservada, bajo los supuestos que en primer lugar es un procedimiento administrativo en curso, el cual a la fecha no se ha finalizado, ya que constituye un estudio complejo, en el que se ha conceptualizado un polígono de distribución alimentaria al por mayor, que pretende convertirse en el centro de alimentación de referencia del país, en el que operan comerciantes de todo tipo de alimentos, no solo frescos y perecederos, sino también transformados, así como otros operadores de servicios de frío, logística, almacenamiento, transformación y distribución de alimentos.

Así mismo(Sic.), al hacer de conocimiento público el estudio en mención se generaría una ventaja indebida para una persona en perjuicio de terceros ya que cuando el estudio se encuentre concluido deberán realizarse las licitaciones pertinentes, a fin de adquirir los bienes y servicios necesarios para poder echar a andar el proyecto de la Central de Abastos.

En consecuencia hacer público un informe de esta magnitud, sin que a la fecha el mismo se encuentre concluido, compromete las estrategias y funciones estatales

implementadas en esta Secretaría de Estado, pudiendo producirse un daño mayor que el interés público por conocer la información reservada” (fin de citado textual, subrayado propio).

Al respecto, es importante señalar que el requisito de razonabilidad no se agota con la simple argumentación sino que, como todo acto que emana de la Administración Pública, la motivación debe ser congruente, de no ser así, la reserva carece de sustento. Por otro lado, para crear certeza sobre lo argumentado por el ente obligado, resulta indispensable la incorporación de prueba que respalde la reserva alegada.

De lo anterior, es importante señalar que la carga de la prueba, en los procedimientos de acceso a la información, recae sobre el ente obligado, con base al principio de máxima publicidad establecido en el Art. 4 letra “a” de la LAIP. En este contexto, al afirmar dichos argumentos es indispensable comprobarlos; sin embargo, el ente obligado no aportó los insumos necesarios que sustenten la reserva alegada; por lo tanto, no se ha cumplido con el requisito de razonabilidad de la declaratoria planteada.

Por otra parte, poco o en nada se hizo relación en la forma en que se podría generar una ventaja indebida respecto de unos en perjuicio de otros al entregarse esta información, ni cómo esto comprometería las estrategias o funciones estatales en procedimientos en curso; es decir que la declaratoria carece del juicio de daño, puesto que no se ha ponderado el DAIP frente a otros bienes jurídicos que pudiesen ser afectados con la revelación de dicho estudio, tal como se afirma por el ente obligado en el punto “6” parte final de la declaratoria de reserva, a saber “... pudiendo producirse un daño mayor que el interés público por conocer la información reservada”.

(c) **Temporalidad.** Se refiere a que la restricción del acceso a la información debe estar sujeta a un plazo definido, establecido en el Arts. 20 de la LAIP y 31 letra “f” de la RELAIP; y es que, si no se establece el plazo de reserva podría vulnerarse el DAIP de las personas, al generar incertidumbre sobre el momento en que la información estará a su disposición.



En la declaratoria objeto de análisis, se señala que el plazo de reserva es por un período de **tres años** desde el 17 de septiembre de 2018 (fecha en que fue adoptada la reserva OPPS/01/2018), por lo que dicha reserva de información finalizará el 17 de septiembre del año 2021, plazo que en principio no aparenta ser excesivo.

No obstante, la reserva no especifica – tanto en este apartado como en el de “razonabilidad” – una justificación del por qué es necesario reservarla por dicho plazo, máxime cuando en el mismo documento se advierte que el estudio de factibilidad solicitado fue generado el 9 de octubre de 2017; es decir, que desde la fecha en que fue generada la información hasta la fecha en que se declaró su reserva transcurrió un plazo de 11 meses aproximadamente, plazo dentro del cual esta información fue de acceso irrestricto durante ese período de tiempo, lo cual nos hace cuestionarnos: si dicha información realmente contiene una estrategia a implementar y cuya divulgación generaría una ventaja en beneficio de quien la conociera, ¿por qué se demoraron tanto en excluirla del conocimiento público? ¿qué fue lo que motivó al ente a declarar su reserva 11 meses después y por qué por 3 años? Interrogantes que han surgido del presente análisis y valoración de los argumentos esgrimidos por el ente obligado, con lo cual queda más que demostrado que no lograron acreditar su postura ante este ente colegiado.

En consecuencia, a criterio de este Instituto, el **MAG** no logró acreditar los motivos de reserva del “estudio de factibilidad del proyecto ‘Construcción y equipamiento de una Central de Abastos para mejorar e incrementar la competitividad de los productores y comercializadores agropecuarios en la zona central del El Salvador’”, por lo que se tiene por no cumplidos – en forma concurrente – los requisitos de la reserva invocada; por lo que al no reunir los requisitos necesarios para su adopción, es procedente que este Instituto revoque la resolución impugnada y declare justificado el acceso a la información solicitada, de acuerdo al Principio de Máxima Publicidad de conformidad al Art. 4 letra “a” y 5 de la LAIP, y los principios de seguridad jurídica y legalidad de los arts. 2 y 86 de la Constitución de la República, por ser información de naturaleza eminentemente pública que no debe estar sujeta al régimen de excepción planteado por el ente obligado.

3. Decisión del caso:

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y los Arts. 2, 6,85 y 86 de la Cn; 52 Inc. 3°, 58 letra “d”, 90, 94, 96 letra “d” y 102 LAIP; 79 y 80 del RELAIP, y 217, 318 y 319 del Código Procesal Civil y Mercantil, a nombre de la República de El Salvador, este Instituto **RESUELVE**:

a) **Revocar** la resolución emitida por la oficial de información del **Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)**, de fecha 18 de junio de 2018, que denegó el acceso a la información siguiente información: “Copia del estudio de factibilidad de la Central de Abastos”, siendo el nombre técnico: “*Estudio de factibilidad del proyecto ‘Construcción y equipamiento de una Central de Abastos para mejorar e incrementar la competitividad de los productores y comercializadores agropecuarios en la zona central del El Salvador’*”, por los motivos expuestos en la presente resolución.

b) **Ordenar al Ministerio de Agricultura y Ganadería** que por medio de su titular, dentro del plazo de **cinco días hábiles** contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución, desclasifique y entregue a través de su oficial de información a **Oscar Miguel Fiallos Valdez**, el “*Estudio de factibilidad del proyecto ‘Construcción y equipamiento de una Central de Abastos para mejorar e incrementar la competitividad de los productores y comercializadores agropecuarios en la zona central del El Salvador’*”, por ser información pública.

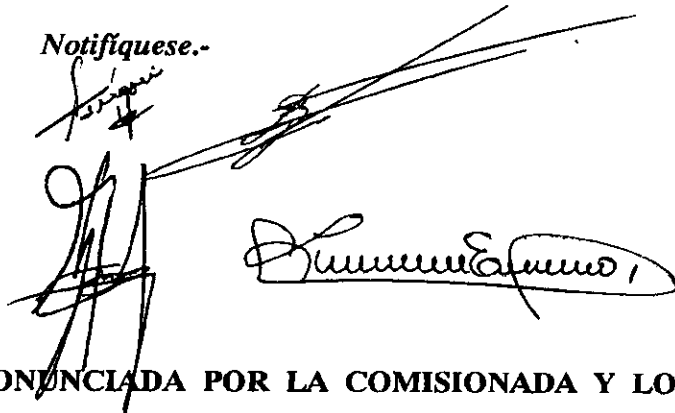
c) **Ordenar al Ministerio de Agricultura y Ganadería**, que dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo anterior, remita a este Instituto un informe de cumplimiento de la obligación contenida en la letra b) de esta parte resolutive, el cual incluya un acta en la que conste la documentación entregada al apelante, así como su recepción, y una copia del índice de información reservada actualizado, bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe puede ser remitido vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv**.

d) **Hacer saber a las partes** que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si así se considerase necesario.

e) **Remitir** el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para verificar la eficacia de esta resolución.

f) **Publíquese** esta resolución oportunamente.


Notifíquese.-

The block contains several handwritten signatures and initials. At the top left, there are initials that appear to be 'JH' and 'CC'. To the right, there is a long, horizontal signature. Below this, on the left, is another signature. To the right of that is a signature that reads 'Hummer E. Funes'.

PRONUNCIADA POR LA COMISIONADA Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN

JH/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los treinta días del mes de noviembre de dos mil veinte.


José Augusto Hernández Funes
NOTIFICADOR
IAIP

